



DIARI DE SESSIONS DEL
PLE
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 770-1987

Fq.Con.núm. 33/27

IX legislatura

Any 2015

Núm. 5

Presidència
de la Molt Honorable Sra. María Consuelo Huertas i Calatayud

Sessió extraordinària celebrada dia 3 d'agost de 2015

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials (RGE núm. 4706/15). **106**

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats.

Abans de començar voldria demanar un minut de silenci atesos els actes de violència de gènere que hi ha hagut aquesta setmana passada tant aquí a la nostra comunitat, amb una dona assassinada, com l'assassinat de dos nins de mà de son pare.

Per favor, els preg que facem aquest minut en solidaritat amb les víctimes.

(Aplaudiments)

Debat i votació sobre la validació o derogació del Decret Llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials (RGE núm. 4706/15).

Començam la sessió amb l'únic punt de l'ordre del dia que correspon al debat i la votació sobre la validació o la derogació del Decret Llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials.

Segons indica l'article 148.2 del Reglament, el debat s'iniciarà amb l'exposició per part d'un membre del Govern de les raons per les quals el decret llei ha estat promulgat.

Sr. Negueruela, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL, COMERÇ I INDÚSTRIA (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días, señores y señoras diputadas, hoy estamos aquí para defender los intereses de nuestras islas, para preservar una ley que es fruto del consenso del sector y de los grupos políticos de nuestra tierra, una norma que afecta directamente y de forma singular al carácter insular de estas islas a las que todos queremos, vital para nuestro equilibrio territorial y medioambiental y también capital para nuestro tejido industrial y comercial así como para las organizaciones sindicales y de consumidores.

Este gobierno empezó a trabajar el 3 de julio, pocos días después Madrid nos comunica que la Ley de comercio de las Islas Baleares aprobada en octubre de 2014 por este parlamento considera que en algunos de sus puntos puede atentar contra la ley de bases y por tanto es objeto de discrepancia por contradecir dicha norma. Se nos advierte de que el plazo para reunirnos y negociar con el Estado finaliza el 18 de julio, cosa que queremos destacar, nada más llegar al Gobierno, el 3 de julio, se nos advierte ya directamente que el plazo además finaliza el 18 de julio, finaliza porque es el último día que el Estado tiene de plazo para presentar el recurso de inconstitucionalidad.

Fruto del esfuerzo y el diálogo entre la Conselleria de Treball y el Gobierno central a través de esa comisión bilateral que se constituye con esos pocos días conseguimos llegar a un acuerdo en el que se solventan las diferencias entre ambas partes y se adecuan las discrepancias normativas. Gracias a ello, los representantes del Estado manifiestan su compromiso de no interponer recurso de inconstitucionalidad un jueves por

la tarde, horas antes de encontrarnos con el recurso de inconstitucionalidad.

Por tanto, el 17 de julio ante nuestra sorpresa el Gobierno de España rompiendo unilateralmente el acuerdo interpone un recurso de inconstitucionalidad contra determinados artículos de la ley balear de comercio, suponiendo por nuestra parte una grave deslealtad institucional que consideramos que no debía llevarse a cabo en ningún caso.

¿Qué implica el recurso? El recurso lo que implica es la suspensión de varios artículos de nuestra norma autonómica. ¿Qué implica además la entrada en vigor de la norma estatal al suspenderse los artículos de la norma autonómica? En un primer momento, inseguridad jurídica, la inseguridad jurídica que llevará a estar durante determinados meses sin saber qué norma es la se ha de aplicar, porque nosotros sostenemos la constitucionalidad de nuestra norma, y los graves riesgos que eso podría conllevar.

¿Qué implica también?, que la administración autonómica no podrá ejercer un control previo a la ampliación e instalación de grandes establecimientos comerciales; implica que cualquier interesado sólo con una declaración responsable sin ningún control previo puede empezar a construir, lo cual no es una garantía suficiente ni para la administración ni para nuestros ciudadanos ni para desde luego nuestro equilibrio territorial, ya que -como hemos señalado en diversas ocasiones- cualquiera con una declaración responsable podría edificar por encima de 750 metros en cualquiera de nuestras islas.

Desde nuestro punto de vista es una decisión política y arbitraria de Madrid, que supone una ruptura del diálogo y del acuerdo previamente alcanzado; es una agresión injustificada que denota una falta de estima y conocimiento de la realidad de nuestras islas y que atenta directamente contra los intereses de Baleares, contra nuestro (...) y contra uno de nuestros principales sectores. Es una ley que contradice además el consenso que se había alcanzado para aprobar la Ley de comercio, precisamente durante la legislatura pasada.

En definitiva, implica una grave..., una situación de máximo riesgo para nuestro equilibrio territorial, medioambiental y comercial caracterizado también por nuestra insularidad con una realidad económica social singular diferente del resto de comunidades autónomas que el Gobierno de España no ha sabido entender.

¿Por qué justificamos la necesidad de un decreto ley? En primer lugar porque el Gobierno del Estado agotó las vías del diálogo al, unilateralmente, interponer un recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué la urgencia y la extraordinaria necesidad?, porque el Tribunal Constitucional con un plazo record, con una celeridad estimable para cualquier órgano judicial, que esperemos que siga sucediendo en otro tipo de recursos, en el plazo de cinco días suspende nuestra norma. Al suspender nuestra norma nos encontramos en una situación de riesgo y por tanto es necesario actuar, es necesario dotar de seguridad jurídica ante la incerteza creada por el Gobierno con la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad.

Por tanto, nuestro objetivo es salvaguardar nuestra seguridad jurídica, evitar que se salpique la ley estatal y se produzca un efecto llamada, garantizar nuestro equilibrio territorial, medioambiental y comercial y nuestro interés general, un interés basado en la distribución comercial, en la protección del entorno urbano, en la armonía con la ordenación del territorio, la preservación de nuestro patrimonio histórico y artístico y en atención a las características geoeconómicas de nuestras islas.

¿En qué consiste el decreto ley que hoy presentamos a convalidación? Se plantea el decreto ley para evitar la situación de indefensión que nos ha creado, se justifica... y se señala que hemos actuado de forma inmediata para no dejar ni un día entre la suspensión del Tribunal Constitucional de nuestra norma y la aplicación de la ley básica, es decir, el Tribunal Constitucional admite a trámite la demanda, se publica en el BOE esa admisión y por tanto la suspensión de los artículos, artículos vitales para garantizar ese equilibrio, y nosotros el mismo día que entra en vigor por la publicación en el BOE adoptamos un decreto ley que entra en vigor ese mismo día con la publicación del BOIB. Por tanto, hemos asegurado y hemos garantizado que no hay ningún día de inseguridad jurídica, que a pesar de haber tenido que actuar con la máxima celeridad este gobierno ha actuado para proteger los intereses del sector y así lo ha hecho no dejando ni un día de margen para que se produjese esa inseguridad jurídica.

El decreto ley recoge las modificaciones acordadas en la Comisión bilateral entre la comunidad y el Estado. Es un decreto ley que tenía por parte del Estado determinadas salvaguardas que nosotros hemos entendido que se podían adoptar y corregir, pero... pero que son vitales para nuestro equilibrio y que no afectan a lo esencial de la ley de comercio, que se modificaba con el acuerdo y que se introduce en este decreto la tramitación única autonómica, que facilita y unifica el procedimiento para los interesados, que sólo tendrán que acudir a la dirección general competente en materia de comercio, será esta dirección general la que tenga que articular un procedimiento para solicitar el resto de licencias preceptivas, no supone la eliminación de licencias preceptivas, supone que se tramitarán de una forma única, el sentido positivo del silencio administrativo, antes la Ley de comercio establecía un silencio negativo, pasa a estimarse un silencio positivo en el plazo de tres meses; y la corrección de la definición de las zonas de gran afluencia turística, ya que la ley balear establecía 200.000 habitantes, los municipios de más de 200.000 habitantes, y ahora pasa a municipios de 100.000 habitantes, ya que es lo que establece también la propia ley de bases y además porque en el ámbito de nuestras islas no tienen ningún efecto práctico ya que el único ayuntamiento que cumplía antes y después de la norma es el de Palma.

¿Qué introducimos además en el decreto ley?, una suspensión temporal, hemos añadido una disposición adicional primera que consiste en... durante seis meses una suspensión temporal de autorización única y regulada. No es una suspensión caprichosa, sirve para que el Govern, los consells, las distintas administraciones que lo consideren necesario, adopten las medidas necesarias para salvaguardar el equilibrio que cada uno dentro de sus competencias considere, y para que el Govern articule y lleve a cabo el desarrollo normativo para

poder articular el procedimiento único de autorización que así hemos acordado. Sirve para adoptar las medidas necesarias en los distintos ámbitos competenciales, como señalaba: el ámbito urbanístico, territorial, medioambiental, entorno urbano, patrimonio histórico, artístico y cultural. Y sirve para dar margen de tiempo a todos los operadores económicos para que puedan adaptar sus proyectos a este régimen de autorización.

Por último, señalar cómo hemos actuado. La actuación del Govern ha sido rápida. Desde el primer momento nos hemos puesto a trabajar a solucionar un tema, que lo teníamos encima de la mesa nada más llegar. Ha sido resultado del diálogo y consenso, diálogo y consenso necesarios para proteger nuestra seguridad jurídica y defender los intereses y la realidad insular de Baleares. Hemos negociado y dialogado con Madrid en el seno de la comisión bilateral con total..., por nuestra parte con una total seguridad hacia ellos, con una total lealtad, que hemos visto que no se ha producido desde la misma parte, desde su punto de vista. Hemos convocado con urgencia la Comisión Interinsular asesora del comercio, en el seno de la cual hemos mantenido un diálogo fluido y constante con todo el sector y con todos los actores implicados que ha desembocado en un acuerdo unánime. Hemos convocado la Junta de Portavoces de este parlamento, a quienes hemos informado de todos los detalles acerca del recurso interpuesto por Madrid, resultando también un consenso político unánime que esperamos que se traslade.

Finalmente, también, dar las gracias por el apoyo y consenso de todos los grupos y actores políticos del sector para poder adaptar las medidas oportunas en defensa de los intereses de nuestras islas. Nosotros queremos señalar que es una forma de gobernar nueva, desde el diálogo; nosotros gobernamos desde el diálogo y con todos desde el primer momento; desde que sabemos que sucede esto nos hemos puesto en contacto con todas las organizaciones comerciales, sindicales, con todo el sector, asociaciones de consumidores, con todos los grupos políticos, para buscar un diálogo, porque creemos que el diálogo es lo que nos hará fuerte y el diálogo es lo que nos podrá justificar frente a cualquiera, aunque sea Madrid, que nosotros tenemos la fuerza de ese diálogo. El diálogo nos hace más fuertes frente a los que creen que la imposición es la fuerza. No creemos en la imposición, nosotros, y por tanto el diálogo es lo que mantendremos como eje vertebrador, porque si tenemos el diálogo con todos y tenemos el consenso con todos conseguiremos la fuerza que otros creen que sólo se puede obtener desde la imposición. Nosotros, de todas formas, lo que sí vamos a dejar claro es que el diálogo lo que no supone frente al Gobierno es ningún pliegue. Nosotros con ese diálogo nos sentiremos fuertes, y actuaremos con la contundencia que hemos actuado en este caso y en los casos que vengan sucesivos por parte de este gobierno de España, que hay veces que no entiende ni comprende el hecho insular ni la diferenciación de nuestra tierra.

Por tanto hemos hecho lo que se tenía que hacer; nuestra respuestas y las medidas adoptadas han sido rápidas y contundentes porque la cuestión así lo requería. No hemos quedado impasibles ante decisiones arbitrarias del Gobierno de España ahora, y desde luego no lo haremos en el futuro. Nuestra tierra, nuestra realidad, los intereses que nos son propios serán nuestra prioridad. Por eso esperamos y deseamos

que este decreto ley sea aprobado con el máximo consenso de todos los grupos parlamentarios de este parlamento.

Señorías, señores y señoras, por último quiero agradecer desde esta cámara el trabajo de todos dentro del Consejo asesor interinsular de comerci, a la Junta de Portavoces, así como a aquellos colectivos que nos han mostrado todo su apoyo durante el proceso. Gracias por este esfuerzo colectivo porque juntos desde el diálogo conseguiremos ir construyendo y avanzando.

Muchas gracias, Sra. Presidenta.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació intervendran els grups parlamentaris en ordre de major a menor en torns a favor o en contra. Intervencions a favor?

Té la paraula el Sr. Marí Bosó del Grup Popular.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, coincido con el Sr. Conseller en la voluntad de diálogo, de consenso, de mirar de hablar las cosas, y esto es lo que se intentó, pese a lo que se decía en la anterior legislatura, y creo que el primer sorprendido con el consenso unánime que obtuvo esta ley de comercio han sido usted y su equipo cuando han entrado en la conselleria, que se han encontrado, es verdad, con un trabajo realizado por el anterior conseller, también con un trabajo realizado con el Estado de fijación de posiciones, el Estado manteniendo unas y el govern anterior manteniendo las nuestras, ¿no? Por lo tanto en ese espacio de diálogo y de consenso nos va a encontrar, y por eso le quiero anunciar al inicio de mi intervención de este debate la intención del grupo mayoritario de la cámara de abstenerse en la convalidación del decreto ley 2/2015, de medidas urgentes en materia de grandes establecimientos comerciales, que el Govern nos somete a consideración.

Votaremos abstención porque el decreto ley presentado efectivamente corrige técnicamente, y lo hace bien, corrige técnicamente aspectos de matiz de la Ley 11/2014, de comercio de las Islas Baleares. votaremos abstención porque defendemos la previsiones de la Ley de comerci 11/2014 en relación a la autorización única autonómica de grandes establecimientos comerciales y las dimensiones adaptadas a la realidad territorial de nuestras islas de dicha figura. votaremos abstención porque defendemos con usted la plena constitucionalidad de los preceptos impugnados, y defendemos además la unanimidad alcanzada en la aprobación de esta ley de comercio de las Islas Baleares. Pero también votaremos abstención porque en el desarrollo del proceso desde la reunión de la comisión bilateral para la resolución de discrepancias con el Estado de 15 de julio hasta hoy se nos han despertado las dudas; déjeme explicárselo.

La Ley de comercio de las Islas Baleares es la norma que constituye el mínimo común denominador de todos los actores

y agentes sociales que participan en la actividad comercial de nuestras islas. Es una ley fruto del esfuerzo negociador y el impulso del Govern balear en la anterior legislatura, de la voluntad del anterior gobierno de tejer complicidades y acercamientos, pese a lo que se dijera; en definitiva, una ley en que la inteligencia de las patronales y asociaciones del comercio, que hoy nos acompañan, de los usuarios y consumidores, que también están aquí, de agentes sociales y del Govern, su inteligencia les dictó que era mejor una ley consensuada, con razones de todos, que todas las leyes llenas de verdades absolutas.

Dicho esto, y poniendo en valor la Ley de comercio 11/2014, nos interesa hacer referencia a una serie de aspectos. Vivimos días de novedad, de agitación, en los que todos debemos resituarnos con rapidez, pero creemos que conviene a la responsabilidad del Govern no apresurarse, porque el apresuramiento nos puede llevar a cometer errores, y ese apresuramiento, ese apresuramiento, al mismo tiempo que el conseller negocia con el Gobierno central un acuerdo, la presidenta del Govern incendia la negociación con declaraciones en los medios contrarias a lo que estaba negociando el conseller en aquel mismo momento; por eso alabamos la prudencia y la templanza del conseller el día 15 de julio por encima de la imprudencia de la presidenta del Govern ese mismo día. Es apresuramiento llevar el pasado día 24 al Consell de Govern un decreto ley con una disposición adicional estableciendo una moratoria de licencias comerciales de dudosa legalidad, cuando el día anterior ya estaban convocados a una reunión bilateral con el estado para celebrar el 30 de julio, es decir, podría haber esperado al viernes 31 de julio a saber cómo había pasado o cómo había acabado la reunión del jueves día 30, y a lo mejor hubiéramos conseguido la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado, que, repito, constituye un grave error por parte del Gobierno central. O también, de haber reflexionado un poquito, hubiera visto la posibilidad que tienen los consells insulars de suspender la concesión de licencias con carácter previo al inicio de la redacción de sus planes directores, lo que no adolece de ningún tipo de reproche legal, e incluso está más de acuerdo con la voluntad federalizante de la presidenta del Govern o con el posicionamiento de MÉS per Menorca que es socio suyo en las tareas de gobierno.

La disposición adicional incluida hace vulnerable la norma y deja el flanco abierto a su impugnación y si se impugna la ley o transcurren los seis meses, ¿qué hacemos? Es por ello que le decía que existen alternativas más respetuosas con nuestra pluralidad insular o con nuestra realidad pluriinsular, que tienen la misma virtualidad, que son más idóneas y más difíciles de impugnar.

No quiero darle ideas, Sr. Conseller, porque a veces las ideas con ustedes son un poco peligrosas, pero sus socios parlamentarios de Podemos han sido más inteligentes en Barcelona, y aunque han aprobado -dejéme decir, con respeto-, desde nuestro punto de vista, una barbaridad, aunque han aprobado una barbaridad, al menos es difícilmente atacable desde el punto de vista jurídico, y les ha bastado una simple suspensión de planeamiento en relación a los establecimientos hoteleros y no han necesitado ningún decreto ley ni ninuna ley.

En fin, apresuramiento y prisas, prisas, prisas, creemos, Sr. Conseller, que se ha dejado llevar un poco por este estado de prisas que caracteriza la acción de gobierno en este inicio de legislatura, porque ese apresuramiento, anunciar sin encomendarse a nadie, el cierre de las terrazas del Passeig des Born; porque ese apresuramiento, que en el primer Consell de Govern se apruebe un proyecto de ley, saltándose todo procedimiento y sin recabar ningún informe preceptivo; ese apresuramiento en traer a este pleno el nombramiento del director general de IB3 sin ni siquiera saber si se cuenta con el apoyo de los propios socios parlamentarios y así tener que retirar el punto del orden del día. Y ese apresuramiento, en fin, los nombramientos de altos cargos del Govern, desnombrados a los pocos días, o que se cometa la imprudencia de nombrar director general al primero que uno se encuentra en su casa.

No convienen los apresuramientos a la acción de gobierno, como no conviene en esta materia de la actividad comercial en nuestra islas que, pese a que sabemos que había un error al recurrir en inconstitucionalidad, inmediatamente, a los cinco minutos, todo el mundo se apresurara a cometer errores, y se presentaran proposiciones no de ley maximalistas, fuera de todo el consenso del sector, o propuestas de declaraciones institucionales anticapitalistas. En el Gobierno conviene dejar de lado la retórica y gobernar, y como está en nuestro ánimo ayudarle, Sr. Conseller, en beneficio de todos los actores de la actividad comercial, le pedimos que no se deje llevar y que se guíe por la prudencia que ha demostrado al inicio para no destejer los consensos alcanzados.

Y si en estos días pasados al error del recurso de inconstitucionalidad usted ha sumado las prisas, en su intervención de hace cinco minutos yo creo que al apresuramiento usted ha sumado la deslealtad, el ahogamiento que dice venir padeciendo este govern, porque el estar ahogados es la segunda característica de estas primeras semanas en el Govern. Nos ahogan, son desleales; sí, son desleales, sí, pero cuando el Govern anterior pactaba las discrepancias en las comisiones bilaterales era su misión, y cuando no la pactamos, por defender los intereses de los comerciantes y consumidores de Baleares, hay deslealtad. Sí, nos ahogan, sí, pero no Montoro, sino el sistema de financiación de 2009 que ustedes aprobaron, que cuando había crisis y no había recursos, y en crecimiento porque técnicamente nos quita la recaudación de IVA en la comunidad.

Sí, nos ahogan, sí, porque el sistema aprobado por ustedes no da ni para la educación o la sanidad, pero en cambio aprobándolo ustedes renunciaron expresamente a los 584 millones que este Parlament estableció en 2004, como déficit de financiación y las transferencias de dichas materias.

Sí, es la guerra, los consejos de guerra, nos ahogan, la santa inquisición y todo lo que ustedes quieran, pero oiga, no se olviden de gobernar un poquito y pongan en práctica aquello que les parecía tan fácil cuando nos decían que la política es priorizar. Prioricen, ayuden a los consells insulars y empiecen por los planes directores de comercio; ayuden a los ayuntamientos, pónganse manos a la obra en el desarrollo de las medidas de regulación y ordenanzas de venta ambulante; establezcan las directrices que permitan evitar el intrusismo en

el sector; preocuparse también por los consumidores y usuarios y sus intereses que, en ocasiones, parecen ausentes o nadie escucha en los debates sobre la actividad comercial. Se hicieron verdaderos equilibrios para poder atender las peticiones y necesidades de consumidores, empleados y comerciantes, entre grandes y pequeños, todos aportaron, todos cedieron, y se consiguió. Prioricen y desarrollen las herramientas que da la sociedad en la Ley de comercio y ayuden a nuestro tejido empresarial, a nuestros ciudadanos y a nuestras islas.

Sr. Conseller, entienda esta abstención como una mano tendida en beneficio del sector, creemos que la norma que aprobamos, al haber introducido la disposición adicional, es vulnerable, creemos que era más acorde con nuestra realidad pluriinsular que los consells pudieran decir la suya, pudieran suspender planeamiento e iniciar la redacción de los planes directores sectoriales, creemos que tenían la misma virtualidad, pero era más idóneo y más difícilmente atacable.

Y le queda camino por recorrer, y si en lugar de la retórica opta por el trabajo y por buscar el consenso con los comerciantes y los consumidores, con sus asociaciones representativas, y por ir desarrollando una ley que es buena para todos, tendrá, en ese caso, el respaldo del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sembla que hi ha hagut una mala interpretació, s'ha considerat l'abstenció com a intervenció favorable, realment el Grup Popular hauria d'haver intervengut en el moment de la fixació de posicions. Bé, ara ja està, però ho dic perquè quedi clar per a la resta, perquè tenc tota la resta de grups parlamentaris com a intervencions a favor; si no és així, per favor...

Sra. Camargo, té la paraula.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyories, membres del Govern. Vull començar aquesta intervenció recordant aquest crit del 15M que a molts va sobtar i que deia: "No és una crisi, és una estafa". Sí, tothom ens havia dit que aquesta crisi era un fenomen meteorològic, absolut, una força inevitable de la natura, però ja fa anys, quatre com a mínim, ens vam adonar que no era així, que la crisi era només una excusa per aprofundir en un model de societat on les desigualtats es tornaven una cosa normal que no es podia combatre, on la voracitat dels de dalt acabava gradualment amb els nostres drets i els nostres doblers.

Jo, com molts de vostès, me'n record d'aquella màxima que deia que tot es podia autoregular, tot, des dels mercats financers al mercat de treball, incloent-hi la versió ibèrica del trànsit, perdonau-me l'acudit, però crec que és molt simptomàtic del desgavell aquella frase d'Aznar, que deia *Quién te ha dicho a tí las copas de vino que tengo que beber o no tengo que beber*.

No, senyories, la desregulació del Partit Popular ens condueix al desastre, ara el Govern de Madrid diu que la Llei de comerç balear contradiu la Llei de mesures urgents per a la liberalització del comerç, pretenent així aturar una llei que genera consens a les nostres illes, que s'ha fet mitjançant el diàleg i que imposa un mínim imprescindible de regulació per als grans establiments a les Balears.

Imagineu-vos un moment el que pot produir la Llei de mesures urgents per a la liberalització a l'illa de Formentera: una gran superfície, sense llicència prèvia, que s'obris allà, podria arrasar un quart dels llocs de feina en aquesta illa en qüestió de moments. Sincerament, no puc entendre la irresponsabilitat del Partit Popular a Madrid, que tants efectes negatius tindria a ca nostra i, a més, en una situació en la qual ja plou sobre mullat, no es poden destruir més llocs de feina a les nostres illes.

Mesures urgents per a la liberalització del comerç, això em sona més aviat com un eufemisme. Jo em deman: quina urgència hi ha per posar en marxa urgentment aquesta llei? La crisi econòmica tota sola ha fet tancar moltes botigues, però la crisi-estafa més crisi-desregulació fa que les dades es multipliquin. Malauradament, tenim un exemple molt clar a l'estat d'aquest desgavell i es diu Comunitat de Madrid, capital de l'Estat i capital també del tancament de petits comerços, i la causa són els seus plans de desregulació d'horaris i llicències. Ens sap greu, però em neg radicalment a aplicar polítiques fracassades a les meves illes.

I com que defens el petit comerç, hi ha una raó molt clara i molt senzilla: el petit comerç és on treballa més gent en proporció amb les seves vendes. Però no només és una qüestió de llocs de feina, la qual cosa ja és prou important, per a Podem el comerç de proximitat és un requisit per al canvi de model productiu, és on podem esperar unes arrels a l'economia local i amb la producció ecològica i pròpia. Per això, els botiguers i botigueres de l'illa ens trobaran sempre al seu costat.

Podem sempre s'ha manifestat del costat dels treballadors i treballadores del comerç, tant autònoms com assalariats, que fan feina per a d'altres, ja sigui al petit comerç o a les grans superfícies. La liberalització que es defensa per part del Partit Popular pretén fer-nos tornar al segle XIX i destruir els drets que tant ens ha costat aconseguir.

S'ha de regular el sector, s'han de regular els horaris comercials i no es pot confiar amb la llei del mercat quan les parts parteixen d'una posició de franca desigualtat. Entre el fort i el dèbil, senyories, la llibertat oprimeix i la llei, en moltes ocasions, allibera.

M'agradaria també demanar al Partit Popular quin interès té que el comerç estigui en cinc mans que tothom coneix, que ja representen més de dos terços del comerç minorista a l'Estat. Jo proposaria al Ministeri d'Hisenda que digui les coses pel seu nom, es tracta de la Llei de mesures urgents per monopolitzar el comerç minorista.

Tornant un poc a ca nostra i després que Jaume Matas sacsegés aquestes Illes i destruís també la reputació del nostre entorn, va venir Bauzá a destruir els serveis públics i la setmana

en la qual el Govern i el Ministeri d'Hisenda varen recórrer la Llei de comerç que va aprovar el Govern Bauzá, aquest partit què feia? La setmana del 17 de juliol, el Partit Popular estava en plena guerra de famílies: Bauzá segon contra Sagreras i Bauzá primer contra Sagreras i Miquel Vidal contra tots quatre, organitzant sopars i dinars dels uns contra els altres; aquest és el servei que feu, senyories, en aquestes illes, i per això, independentment de la direcció del vot del Partit Popular avui en aquesta cambra, no hi havia ningú que pogués dir-li a Madrid el desgavell que representa aquest recurs per a les nostres illes.

Casualitat o no, de la mateixa que va finalitzar la primera batalla de les pugnes intestines dins el Partit Popular, amb un cop de mà. Sincerament, no m'agradaria haver d'anar a Madrid a demanar suport per a la meua família política i que ni em pogués assabentar dels plans del Govern de l'Estat de Madrid de recórrer una llei autonòmica que era de la meua competència.

Presidenta, senyories, membres del Govern, nosaltres donarem suport al Govern de les Illes, perquè, malgrat hi puguin haver coses de la Llei de comerç que no ens agradin, a Podem creiem de manera ferma en la democràcia i el més bàsic de la democràcia és la capacitat de generar consensos mitjançant el diàleg. Aquesta llei s'ha fet amb el consens del sector, trobam que protegeix, encara que ho podria fer més, el petit i mitjà comerç. Per això entenem que és essencial aquest decret llei el qual suposa que les grans superfícies no puguin aprofitar aquest buit temporal que s'ha imposat amb el recurs.

I aquí és on sospitem també que hi ha o pot haver-hi interessos amagats; la voluntat dels grans empresaris de construir grans superfícies a la nostra illa, suposem que són els que han pressionat el Govern de Rajoy per posar aquest recurs. Doncs bé, les Illes Balears no són un centre comercial, i ho diem ben alt des d'aquesta plataforma com a altaveu de la gent, "*sai NO to Palma Springs*," "digués NO al Palma Springs"; som al costat de la plataforma per Ses Fontanelles, que lluita des de fa més de deu anys per salvar la darrera zona humida de Palma.

És necessari regular això, perquè la manca de regulació produeix abusos pels poderosos i els rics, els que governen sense preguntar-se..., sense presentar-se a les eleccions, les Illes són només un territori de negoci, no importa si es destrueix el medi ambient, no importa si es destrueix el territori, no importa si es perjudiquen milers de famílies que viuen del comerç de proximitat. I aquestes són precisament les majories socials al costat de les quals nosaltres sempre hi serem.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, té la paraula.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a totes i a tots. Ja sabem que el nostre grup no compartia gaire la política de comerç de l'anterior govern, de fet una de les meves camisetes preferides que més he lluit en aquest parlament, deia "Bauzaus", justament amb al·lusió, no l'he duta perquè ja la tenc un poc rovellada de tant d'haver-la de dur, justament amb al·lusió a aquesta política de suport al grossos, a les grans superfícies, que també ha posat en perill, com comentava ara fa un moment la companya de Podem, a llocs emblemàtics de les nostres Illes com Ses Fontanelles, la darrera zona humida de Palma.

Sí, Sr. Mari, *prisa, presa, presa*, la mateixa que van tenir vostès a l'hora de suprimir aquesta zona humida de la cartografia del Pla hidrològic i de facilitar evidentment la seva urbanització per fer una gran superfície comercial, cosa que afortunadament es corregeix gràcies al canvi de Govern a tots els nivells, començant per l'Ajuntament de Palma.

S'ha dit ja aquí, per tant no m'enredaré, que el petit i mitjà comerç, el teixit comercial urbà sosté la vida de ciutats, pobles i barriades, i que quan tanca un comerç, quan tanquen aquests comerços es degrada també la vida d'aquests carrers, barriades i pobles, per cada lloc de feina precari que crea una gran superfície comercial es destrueix un lloc i mig de feina estable en aquest sector, en el sector comercial de proximitat. Apostar pel gros és menjar-se el petit, fer ciutats i pobles més grisos i fer més precaris la nostra societat i la nostra gent amb una societat de serveis i turística on el comerç és o podria ser una activitat clau que contribuís a la prosperitat compartida, i no només d'uns pocs.

No ens agradava del tot la llei, vull dir aquest consens que tant s'ha evocat, fins i tot en el text d'alguna manera del decret llei, tampoc no va ser ben bé així, perquè el nostre grup, per exemple MÉS es va abstenir en la tramitació d'aquesta llei, entre d'altres coses perquè no ens van acceptar cap de les esmenes que vàrem plantejar per millorar el seu text. Perquè, a més, la llei, aquesta que avui ens veiem obligats a defensar, es limitava en bona mesura a acompanyar la legislació estatal i europea en matèria de desregulació, de llibertat d'horaris comercials i d'altres qüestions que tampoc no apareixien i que vàrem esmenar, com el fet de ni tan sols tenir en compte el comerç electrònic, ben important per a una societat pluriinsular on comprar i vendre sempre ho fas amb desavantatge amb altres.

Ens hi vàrem abstenir perquè el sector volia, de totes maneres, que sortís endavant aquesta llei, malgrat contradiccions per a nosaltres molt importants, com les qüestions urbanístiques o la variable urbanística, que també el Govern del senyor "Bauzaus" va introduir amb aquesta llei que ens agradaria en el futur canviar.

El que sí havia fet sempre la normativa autonòmica en matèria de comerç era justament defensar l'especificitat de la realitat de les nostres illes i establia uns límits per a aquests grans establiments comercials i diferenciava en funció de la realitat comercial de cada una de les nostres illes, que té límits evidents com es posa avui en dia en evidència amb aquesta

sobresaturació turística que tenim i que, en part, també afecta el comerç.

El que no té cap raó de ser és el que ha fet Madrid, és el que ha fet el Consell de Ministres, és el que ha fet el Sr. Rajoy, que és un manual, sí, Sr. Mari, de deslleialtat institucional profunda. S'arriba a acords, s'arriba a acords, sobretot pel que fa justament a això, a l'encaix de les nostres illes, de cada illa, al redactat de la nostra llei autonòmica en el marc normatiu estatal i evidentment en el marc constitucional que no ens afavoreix gens, i amb un parell de dies el Govern central incompleix la seva paraula i ens du a la barra, això és el que s'ha fet, si això no és deslleialtat institucional cerquin-me una altra definició i novament es fa servir el Tribunal Constitucional per atacar la diversitat de problemàtiques, de necessitats o d'aspiracions dels pobles de l'Estat i per negar una realitat territorial que és diversa i això és una qüestió que ni volen entendre ni sobretot no volen assumir.

És la mateixa actitud deslleial que en qüestions de setmanes han posat de manifest també des de Madrid, des del Govern del Sr. Rajoy, en altres qüestions vitals per a nosaltres: el finançament. Sí, és cert que ja tenim un sistema de finançament com hi havia, però aquesta inflexibilitat a l'hora de poder negociar l'objectiu de dèficit ofegant-nos encara més és una actitud absolutament deslleial i desconeixedora de la nostra realitat, és, com vàrem qualificar aquest consell de política fiscal i financera darrer, un autèntic consell de guerra. Les inversions estatutàries, no només és que no ens hagin arribat, sinó que a més és que encara facin... volen que els tornem doblers, però és clar, això és una llei orgànica, però aquí el Constitucional, evidentment, i el Consell de Ministres no tenen res a dir, més que reclamar-nos encara més doblers, després-ahir mateix amb la llei de mines quan també s'havia assolit aquesta fita històrica de trobar un equilibri entre l'activitat industrial extractiva i el medi ambient i la darrera: el tema de les prospeccions petrolíferes amb la reactivació de projectes com el del Golf de Lleó o el d'Spectrum, que és el més bèstia de tots, que es publicarà al BOE segons..., als propers dies, segons fonts del mateix ministeri.

Idò davant això, davant aquesta actitud, perquè al final això és una actitud, és una manera de governar, és una manera de defensar en teoria allò públic, però al final el que està defensat és allò privat i als grossos, per a aquests que està fent feina i no per als ciutadans, idò no ens han deixat altre marge que el decret llei, una figura que no crec que entusiasmi cap dels grups de la majoria que donen suport al Govern ni als que evidentment votaran avui a favor o s'abstindran a aquest projecte, però que tal i com està el panorama ens sembla el més coherent, primer per garantir allò que no ha fet l'Administració central, que és complir els acords que s'havien pactat a la comissió bilateral, i això pràcticament el que s'ha fet és traspasar, transposar damunt el paper aquest acord, vull dir... crec que des d'una actitud, el contrari del que ha fet Madrid, de profund respecte institucional i de lleialtat, no?, i segon, evitar aquest efecte crida amb la suspensió de determinats articles per mor d'aquest recurs al Constitucional que podria provocar un allau de sol·licituds de llicències d'activitats de més grans superfícies que ja no volen ni aguanten les grans superfícies que ja tenim, no diguem ja el petit i mitjà comerç, però és que les grans superfícies que hi ha no en volen més tampoc. Per

tant, el que no podia ser és que quedàs aquí un gran buit perquè sí, el mercat és un gran i lliure, però el nostre territori dóna pel que dóna.

Dit això, el que sí esperam és que de la mateixa manera que el nostre grup va fer un esforç perquè la llei de comerç sortís endavant, perquè hi havia una bona part del sector a favor, que el PP avui tengui la mateixa actitud i sobretot que aquesta actitud fos coherent, avui aquí en aquest parlament i demà, el dia que toqui, a Madrid, amb el mateix posicionament per part del Grup Popular, el seus diputats i diputades, senadors i senadores, a les Corts Generals, perquè aquest senyor no s'hagi de tornar posar la camiseta de "Bauzous" i perquè no haguem de fer comparèixer al flamant senador Bauzá per haver votat a Madrid el contrari del que voten els seus correligionaris avui aquí.

Moltes gràcies, salut i república.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Bon dia, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, després de la gran batalla entre Joan Mas i Dragut, sense descans, som aquí per discutir i aprovar o convalidar el decret llei sobre grans establiments comercials.

El Grup Parlamentari d'El Pi, és públic i notori que donarà suport a aquesta convalidació del decret llei, i demanam al Govern que ho tramiti com a projecte de llei. Pensam que és important, el conseller a la reunió que vàrem tenir amb els grups parlamentaris va dir que s'havien de fer els tràmits parlamentaris per introduir altres qüestions que no eren en aquest decret llei i que no eren objecte de la impugnació del Tribunal Constitucional, tenim una oportunitat perquè això sigui una oportunitat i per tant, entenem que s'hauria de tramitar com a projecte de llei.

Tres raons bàsiques per donar suport a aquest decret llei: la defensa de l'autogovern, el model comercial i els temes de fons en detall.

La primera raó, la defensa de l'autogovern. Enguany, que celebrem el tricentenari, és al a dir, la pèrdua de les institucions de les Illes Balears, pensam que és un bon moment per recordar avui aquí que no pot ser aquest buidatge competencial que estan patint les Illes Balears i la resta de comunitats autònomes fruit d'aquest procés de recentralització al què ens està sotmetent el Govern central, sobretot via decrets llei. Els títols competencials horitzontals de l'Estat estan laminant les nostres competències, si les Illes Balears tenen competència exclusiva en matèria de comerç interior, el lògic seria que poguéssim tenir la nostra política pròpia, que poguéssim determinar els horaris comercials, que poguéssim determinar les superfícies, que poguéssim determinar els procediments, però realment aquest estat de les autonomies s'està... desgavellant i el que es produeix és que al final és una descentralització de la despesa,

però que no hi ha possibilitat de prendre decisions pròpies, de tenir polítiques pròpies en les matèries. Per tant, a nosaltres això ens sembla absolutament denunciabile i pensam que el Govern fa bé a combatre aquesta situació i aquesta laminació que protagonitza el Govern central.

Coincidim amb el Sr. Abril que la Llei de comerç de 2014 es va fer en unes determinades circumstàncies, és veritat que amb diàleg i amb el consens del sector, però per a nosaltres va ser una passa enrere, va ser una passa enrere en relació amb el model i amb les lleis comercials que teníem abans. El que succeeix és que ha arribat un moment que aquesta situació de laminació de l'autogovern provoca que un ja no es pugui..., no pugui reformar lleis perquè resulta que si reformes lleis són inconstitucionals; en canvi, si les tens aprovades no t'ataquen la constitucionalitat d'aquestes lleis i això és una paradoxa molt preocupant perquè al final val més no tocar res perquè si no al final t'ho impugnen perquè hi ha preceptes que estaven a les anteriors normes comercials que no havien estat objecte d'impugnació i que ara el Govern central les impugna i les considera inconstitucionals. Paradoxa.

Segona raó, el model comercial. El Pi aposta clarament per un determinat model comercial que és el model comercial de proximitat i per això deia que la llei del 2014 era una passa enrere perquè era una llei que va donar més pes al model comercial d'atracció i per a nosaltres això és una realitat i per tant, nosaltres entenem que les Illes Balears s'havien de moure en els paràmetres de la llei comercial del 2001 i que el que havíem d'intentar era protegir, defensar estar al capdavant, liderar el procés perquè les petites i les mitjanes empreses es poguessin desenvolupar i poguessin exercir la seva activitat econòmica amb tota la solidesa possible.

Entenem que els centres de les nostres ciutats i dels nostres pobles han d'estar plens de vida i que el que no hem de fer és expulsar el comerç als afores de les ciutats i dels pobles i per això, pensam i creim que les lleis, les lleis comercials, són determinants d'aquesta política.

Al sector comercial s'aplica la directiva de serveis perquè tot al final es justifica per la directiva de serveis i resulta que és a l'únic sector econòmic que realment se li aplica en tota contundència aquesta directiva de servei, hi ha moltíssims altres sectors, el sector financer per exemple, on aquesta contundència i aquesta necessitat de transposició de la directiva de serveis, diguem que brilla més per la seva absència; només al comerç amb l'excusa de la directiva de serveis s'intenta implantar una determinada política i un determinat model comercial que, evidentment, és el model de les grans superfícies, dels grans operadors, dels grans capitals i no d'aquestes petites i mitjanes empreses.

La tercera raó, les qüestions de fons. Entenem cada una de les mesures que implanta i que regula aquest decret llei, les definicions de les superfícies, és veritat que només hi ha una justificació com es va demanar a la reunió... perdó, a la comissió mixta, és veritat que hi ha una justificació, però evidentment és un tema molt important i és un tema cabdal el de les superfícies, perquè nosaltres, com a defensors d'aquesta autonomia política, volem que les Illes Balears puguin

determinar quina és la superfície de definició de les grans superfícies comercials.

El silenci administratiu. Evidentment el silenci administratiu és un gran invent de la humanitat que no funciona gens, però al final és la clau de tancament dels procediments, i per tant en general ens pareix, com a idea, que hauria de ser positiu, tot i que sabem que després aquest silenci administratiu positiu genera una gran inseguretat jurídica, perquè l'operador, amb un silenci administratiu positiu, té difícil fer una inversió i emprendre un negoci.

El procediment únic. Evidentment ens pareix molt millor unificar els procediments, ser més eficaços, ser més àgils, i que tot estigui integrat dins un mateix expedient.

La suspensió. La suspensió, evidentment, compta amb el nostre total suport. La suspensió del decret llei no és incompatible amb les normes territorials cautelars que puguin dictar els consells insulars, perquè aquí ha semblat en qualque moment que era una cosa incompatible; en absolut no és incompatible, de fet el mateix decret llei convida els consells insulars a dictar les normes territorials cautelars i els dona aquest termini de sis mesos. Per tant en absolut no ho veim incompatible, ho veim absolutament compatible, i convidam els consells a prendre la iniciativa i també a dictar aquestes normes territorials cautelars.

I el tema de l'exempció, l'eliminació de l'exempció de les llicències d'obertura i funcionament, és un tema que pensam que també és complicat jurídicament, és una de les qüestions que ja venia de la normativa anterior, que ara hi ha dubtes d'inconstitucionalitat i que també pot generar una gran inseguretat, perquè aquells establiments que tenien aquesta exempció en quina situació jurídica queden?, s'han d'acollir a una declaració responsable i a un tràmit municipal de llicència? Hi ha dubtes, i pensam per això que a la tramitació parlamentària, si es tramita el projecte de llei, es podria introduir alguna mesura, com a mínim transitòria, per aclarir aquesta inseguretat.

Pensam -i acab- pensam que no hi ha hagut presses, pensam que hi ha hagut decisió, pensam que hi ha hagut determinació, pensam que era imprescindible reaccionar, i pensam que la defensa del petit i mitjà comerç i la defensa de la competència pròpia de comerç interior no podia quedar enlaire i que el Govern havia de prendre cartes a l'assumpte, que havia de donar un cop damunt la taula i que havia de dir "nosaltres som aquí i aquesta és la nostra política, i volem defensar el petit i mitjà comerç". Per això hi donarem suport.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats, deixin que sintetitzi molt breument la posició del nostre grup. El decret llei que modifica la Llei de comerç és necessari, sense cap dubte, però no és la solució; no ho és perquè volem lleis bàsiques menys invasives i més respectuoses amb la voluntat d'autogovern de les Illes Balears. I, en segon lloc, sí, efectivament, l'actuació de l'executiu Rajoy és sense cap dubte una actuació que no es pot qualificar de cap altra forma que no deslleial, que no partidista, a favor de la recentralització, en contra del Govern de les Illes Balears i en contra de les Illes Balears. Votarem, per tant, a favor de la validació del decret llei de modificació de la Llei de comerç de les Illes Balears, i donarem així suport a la iniciativa del Govern per incorporar els acords de la comissió bilateral Estat-comunitat autònoma, i incorporar també una suspensió cautelar que eviti majors perjudicis al model comercial i territorial de les Illes Balears.

En aquest sentit l'actuació del Govern, de canvi, ha estat impecable per defensar els interessos dels illencs, per defensar el model comercial i territorial de les Illes, per defensar la singularitat d'una comunitat autònoma feta d'illes, per defensar l'autogovern, i ho ha fet a través de l'únic mecanisme que li quedava i que podia ser efectiu, que tenia al seu abast, que és el decret llei. Deia el conseller de Treball que el recurs de Madrid era una agressió contra el model de comerç de les Illes Balears i que suposava una alteració de l'equilibri territorial, i té tota la raó. Nosaltres li diríem, a més, que és una agressió a l'autogovern, una agressió intolerable al nostre autogovern.

Per a MÉS per Menorca el decret llei no és, sense cap dubte, una bona notícia, encara que, com he dit, necessària i encertada. És, en canvi, un episodi més d'una sèrie televisiva que és diu *Espanya va bien* i que narra la història d'un país, les Illes Balears, que és saquejat econòmicament, que és marginat culturalment i lingüísticament, i al qual se li roba cada dia la seva dignitat com a ésser democràtic que és, que és la capacitat de poder decidir, de poder fer polítiques sobre qüestions bàsiques per als seus ciutadans. Perquè el bessó precisament de la qüestió per al nostre grup és precisament d'autogovern, i en aquest sentit el Partit Popular ha actuat des de Madrid i també des del govern Bauzá de la mateixa manera: en contra de l'autogovern de les Illes Balears, intentant retallar, folkloritzar, supeditar la voluntat dels illencs d'autogestionar-se i d'autogovernar-se. Mirin, si no, des del 2011 les actuacions normatives sobre comerç dutes a terme des del Govern central, i també des del govern autonòmic, que han seguit el mateix fil conductor: retallar la capacitat de les Illes Balears de gestionar el comerç interior, una competència de la comunitat autònoma, i en aquesta seqüència d'actuacions val la pena recordar alguns episodis.

Recordem, per exemple, el Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol -recordin, 13 de juliol-, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, on es va establir un màxim de 90 hores setmanals per als establiments comercials, el qual suposava un cop de destrall al petit i mitjà comerç. Amb aquest decret el Govern d'Espanya determinava quins dies podien tenir oberts els comerços de les Illes; aquest decret determinava que hauran d'estar oberts els

comerços no menys de 90 hores setmanals; 90 hores de dies laborables vol dir 18 hores. Açò vol dir que aquesta comunitat autònoma té capacitat per regular entre 18 i 24 hores; açò és el que ens queda d'autonomia, regular sis hores. I açò sense cap dubte per al nostre grup és una autèntica barbaritat, i ho és per als petits comerços i ho és per a l'autogovern; ho és, una barbaritat, a la qual altres comunitats autònomes -Navarra, Catalunya, Andalusia- van reaccionar i van defensar els seus petits i mitjans comerciants presentant recurs, exigint un fet diferencial. Aquí el govern Bauzá no va fer res; perdó, sí que va fer: el segon episodi, Decret Llei 11/2012, de dia 19 d'octubre, decret llei autonòmic, el recorden? Per a què?, doncs precisament per modificar la Llei de comerç de les Illes Balears d'aquell moment, la Llei 11/2001, de 15 de juny, d'ordenació de l'activitat comercial de les Illes Balears, que s'adaptava sense cap recurs, de forma submissa, absoluta, que s'adaptava -com deia- al reial decret anterior. Curiós, no?, curiós; a través d'un decret llei el govern Bauzá s'adaptava sense dir ni mu a un reial decret que retallava en autogovern i que era un cop contra el comerç, contra el petit i mitjà comerç de les Illes Balears.

Tercer episodi: la Llei 11/2012, de dia 15 d'octubre, és a dir, la Llei de comerç de les Illes Balears, que, com també s'ha dit i compartim per part de MÉS per Mallorca, no és la llei de la qual nosaltres ens puguem sentir orgullosos, entre altres coses perquè no inclou mesures de promoció del comerç. Vam dir en el seu moment que era una llei que naixia vella, que era una llei del segle passat, que no incorporava, entre d'altres, l'e-comerç, el comerç a través d'Internet, i que tornava ser un impuls a favor de les grans superfícies comercials i no d'impuls al petit i mitjà comerç.

On son, idò, ara, on és el següent capítol? Doncs, el següent capítol són els advertiments d'inconstitucionalitat, són les comissions bilaterals estat-comunitat autònoma i el recurs per part de l'Estat que es basa, bàsicament, en qüestionar, en considerar que no es justificava suficientment que es consideressin grans superfícies les superiors a 400 metres quadrats a Menorca i a Eivissa i 300 a Formentera, fugint de la normativa estatal que marca que fins a 750 no són grans superfícies, qüestió aquesta molt poc raonable i acceptable, perquè afirmar que serà gran superfície qualsevol establiment que tinguí 750 metres quadrats o més a Menorca o a Formentera o a Madrid, perdoni que els ho digui, però açò és una autèntica burrada, no té sentit. No té sentit no tenir en compte la singularitat del fet insular que exigeix aplicar el sentit de proporcionalitat i adaptar la superfície dels esmentats establiments als territoris de cada una de les illes.

El decret llei és, per tant, un decret llei per salvar, des del nostre punt de vista, una no bona llei, sense la qual emperò els mals encara podrien ser pitjors, molt pitjors, efectivament, perquè parlem d'una suspensió de la llei, d'una part de la llei durant la qual regiria una norma estatal més perjudicial. En aquest sentit hem de dir, hem de reiterar que el Govern ha actuat de forma eficaç i de forma ràpida, com ho havia de fer un govern responsable.

El tema, però, creim que no és de com s'ha actuat, si s'ha actuat bé o malament, o si hi ha dubtes de constitucionalitat o no, el tema és que el marc jurídic actual, les lleis bàsiques de l'Estat no deixen marge a les illes per decidir i gestionar una

competència pròpia, exclusiva, com és el comerç interior; aquest és el nostre combat, perquè si no haurem debats, molts debats, com el d'avui, que haurien de ser o haurien de semblar, vist per un extern, com a debat, autènticament surrealistes.

Per tant, podem fer el combat dins la lògica del centralisme i defensar-nos amb el llenguatge jurídic, com també hem de fer, o podem combatre la lògica del centralisme i defensar-nos amb el llenguatge de la democràcia, de la sobirania i de l'autogovern, i nosaltres apostam per aquest, per aquest segon, sense renunciar al primer. I dins aquest primer, que també forma part del debat d'avui d'aquest plenari, les nostres propostes són molt clares i són propostes per a l'autogovern i per defensar el model territorial de les Illes Balears, i són les que es preveuen, quines? Que el Govern i el Parlament de les Illes es personin en el procés i presentin al·legacions en defensa dels interessos dels ciutadans i de les ciutadanes de les Illes, tal com preveu l'article 34 de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional.

Segon, que els senadors i diputats autonòmics, tots, el senador Antich ja ho ha fet, -ho farà el senador Bauzá?-, que els senadors i diputats autonòmics presentin iniciatives en el mateix sentit. I en aquesta línia, com a grup parlamentari, no en tenguim cap dubte, demanarem la compareixença dels senadors autonòmics perquè expliquin quines iniciatives han dut a terme en aquest sentit.

En tercer lloc, aprovar el decret llei, cosa que avui validarem, atesa la urgència i l'excepció que es produeix amb una modificació per introduir els acords de la comissió bilateral, cosa que, per cert, el Partit Popular no se n'hauria d'omplir massa la boca, 14 lleis de la passada legislatura van ser objecte d'advertiments d'inconstitucionalitat, 14, 14 de les quals hi va haver acord, però només 5 han estat adaptades i incorporades. És a dir que avui vivim en un marc d'absolut caos legal, vivim amb 9 lleis que no estan adaptades i no han recollit els acords aprovats per les comissions bilaterals. Doncs, alerta, alerta, la resposta del Govern quan li demanàvem, fa uns mesos, era sí ho farem; bé, idò, el llegat: 9 lleis que no compleixen els acords de les comissions bilaterals.

I darrer punt, quart punt que creiem que és fonamental posar avui a debat, la situació creada pels recursos, ja no un, sinó dos, d'inconstitucionalitat, ens porten a afirmar que l'estat de les autonomies és, o si no, serà un engany, si, com comprovam lamentablement, les lleis bàsiques de l'Estat no parteixen de les singularitats dels territoris més fràgils; si no és així, l'habitual serà el que ens passa ara, que lleis bàsiques perjudiquen les Illes Balears. I és per açò que creim que serà fonamental posar a debat, i ho transmetem avui, una comissió d'estudi que ens permeti avaluar l'estat de la nostra autonomia, una comissió que ens permeti delimitar quina és la nostra autonomia, l'autonomia real de les Illes Balears, açò és definir el camp d'actuació que té les Illes Balears a cada una de les seves competències, el camp d'actuació real que ens donen les lleis bàsiques, que, des del nostre punt de vista són molt invasores i fetes sense tenir en compte els territoris més sensibles, fetes moltes vegades per lobbys que els interessa ben poc el fet diferencial i la realitat de les Illes Balears.

I en aquest sentit, hem de dir que, lamentablement, comprovam, comprovam com la nostra autonomia és una autonomia, si no em deixen de broma, però de tercera regional, avui ho sembla, per com hem d'actuar enfront d'una incomprensió, jo diria que intolerable.

I acab, dos apunts només finalment: un, crec que és impossible no dir avui, no denunciar avui que en aquest sentit l'Estat ha actuat de forma absolutament deslleial, a dia d'avui no ha publicat encara l'acord, els acords de la comissió bilateral en el *Boletín Oficial del Estado*, cosa que les 14 lleis que van ser objecte de comissió bilateral sí que ho va fer els acords; bé, idò, aquesta no, encara avui esperam la publicació en el butlletí oficial de l'acord de la comissió bilateral que, com ha explicat el conseller, a l'acord que s'havia arribat, on es poden donar per resoltes algunes de les discrepàncies plantejades. I que, lamentablement, s'hagi utilitzat de manera partidista la via del recurs per resoldre qüestions que haurien d'haver estat afrontades, resoltes amb diàleg i amb lleialtat institucional.

També crec que s'ha de dir, hem de lamentar que el dictamen del Consell d'Estat, ja no un, sinó dos, sobre els recursos d'inconstitucionalitat, en el qual s'hi troben persones significades tant del Partit Popular com del Partit Socialista, no hagin introduït cap, cap ni una consideració ni en el sentit de facilitar els acords i evitar el recurs, ni en el sentit de respectar la realitat insular que tant s'ha reclamat avui aquí, la realitat insular de la comunitat autònoma.

Cal dir, per tant, i cap acabar, per tant, que, senyors diputats, senyores diputades, açò no va bé, açò no va bé, l'autogovern d'aquestes illes s'ha de defensar, l'ha de defensar aquest govern i l'ha de defensar aquest parlament. Ens ha costat massa arribar aquí per a avui callar davant les polítiques de retall constant de la nostra autonomia, de les nostres competències, de la gestió de les competències pròpies. Per tant, caldrà fer un pensament, caldrà fer un punt i seguit, però caldrà aturar per revisar quin és el futur, quin volem que sigui el futur d'aquesta comunitat autònoma.

Acab, per tant, i record només que la lleialtat es dona quan qui ha actuat, qui ha governat fins ara, assumeix la seva pròpia responsabilitat. Aquesta comissió bilateral és conseqüència d'una llei impulsada pel Govern Bauzá, amb la qual hi ha punts d'acord i punts de desacord; una llei que hauria d'haver estat defensada fins al darrer dia pel Govern Bauzá...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Martí, ha d'anar acabant, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... -acab-, i no ho va fer, no ho va fer, va fer deixadesa de les seves funcions i va deixar aquest govern en una situació incòmoda, difícil i en la qual aquest govern ha actuat de forma àgil, ràpida i jo diria que amb absoluta responsabilitat, cosa que hauria d'haver fet també el govern anterior.

Moltes gràcies.

(*Alguns aplaudiments*)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Presidenta, miembros del Gobierno, señoras y señores diputados. Desde el inicio de la legislatura en Ciudadanos hemos abogado siempre por el consenso, por la búsqueda del consenso, pero por supuesto por la búsqueda del consenso de todos y entre todos, no el consenso de una mayoría de gobierno, ni siquiera el consenso de las tres quintas partes de esta cámara. Como es notorio y conocido no ha sido éste el caso, recuerdo el caso, por ejemplo, de los síndicos, de IB3, en el que aquellos que no formamos parte de este..., digamos, del conjunto de esta cámara, es decir, de todos..., de determinados grupos de esta cámara, no fuimos partícipes de este consenso.

En lo que aquí hoy nos ocupa sí que se ha producido este consenso, como mínimo esta búsqueda de consenso preceptiva, lo ha sido por parte del propio consejero de Trabajo, en representación del Gobierno, y es algo que nosotros valoramos especialmente. Por supuesto, esta búsqueda de consenso no implica ni garantiza la consecución de este consenso, es decir, el hecho de que a uno lo incluyan en una voluntad de consenso no supone necesariamente que vaya a estar de acuerdo. Pero aquí, en lo que digamos en este caso, en ese decreto ley del que estamos hablando, se dan una serie de circunstancias, una serie de razones que justifican que este consenso también esté presente, por ejemplo el hecho de que estemos hablando de una ley aprobada el año anterior y en la legislatura anterior que fue aprobada, precisamente, con este acuerdo general, a pesar de las observaciones que se han hecho aquí mismo esta mañana y de las precisiones; eso a un grupo nuevo como Ciudadanos, teóricamente, no debería comprometerle, porque no estábamos, no formábamos parte de esta cámara en la anterior legislatura, pero sí que nosotros somos o pretendemos ser respetuosos siempre con las instituciones y con aquello que estas instituciones han aprobado, y en este sentido nos consideramos deudores de esta ley aprobada en el año pasado.

Consenso, que también lo ha habido, y nos parece muy importante, en esa comisión bilateral que recoge de algún modo el decreto ley; es decir, búsqueda de una solución entre las partes, aunque finalmente una de estas partes, por desgracia, se haya echado atrás en este consenso, pero el hecho de que los acuerdos recogidos en esta comisión sean precisamente los recogidos en el decreto ley es algo que nosotros también consideramos de forma positiva.

Y finalmente consenso con la gran mayoría del sector, lo cual es también, como es natural, en cualquier, digamos cualquier ley que afecte, como suele suceder con todas, al conjunto o a una parte de esta sociedad, lo cual es también necesario y altamente recomendable.

Por todo ello, nosotros vamos a votar a favor en el día de hoy, pidiendo también, como ha hecho otro grupo, la tramitación como proyecto de ley. Y sobre todo haciendo votos para que esa búsqueda general de consenso tenga continuidad a lo largo

de esta legislatura y no queda en un simple episodio como el de hoy.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots, diputats i diputades. Voldria també saludar de part del Grup Socialista els representants sindicals i la patronal de comerç que ens acompanyen i tot el públic que ha vingut avui aquí, a aquest parlament, a ca seva, bon dia a tots.

Aquest, presidenta, convidats i diputats, és el debat de la primera iniciativa legislativa que presenta el nou govern, tot just un mes després de prendre possessió, debat sobre la validació del Decret Llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials. Després d'escoltar la presentació que ha fet el conseller i les intervencions dels portaveus dels grups polítics d'aquesta cambra, veiem que, amb matisos, tots reconeixem la necessitat, la urgència i l'oportunitat d'aquest decret llei, la nota discordants, si m'ho permeten, és la del Partit Popular, que sempre, quan ha de triar entre donar suport als ciutadans de les Illes Balears o al Sr. Rajoy, sempre tria el Sr. Rajoy.

Però dit això, veiem que aquest decret llei és la resposta del Govern de les Illes Balears als efectes perjudicials que ha ocasionat el recurs d'inconstitucionalitat que el Sr. Rajoy ha interposat als articles 13, 14.1 i 6, 22.8, 23.3 i la disposició addicional tercera de la Llei 11/2014, de comerç de les Illes Balears; un recurs d'inconstitucionalitat polític, un recurs que manifesta una total i absoluta deslleialtat. La Llei de comerç de les Illes Balears va ser aprovada el 30 de setembre de l'any 2014, amb un ample consens de les forces polítiques i del sector de comerç. Dos mesos després, el 26 de novembre, l'Estat va manifestar discrepàncies sobre alguns articles de la llei, i poc després, el 3 de desembre, va constituir la Comissió bilateral estat-comunitat, per tal d'estudiar i donar solució a aquestes discrepàncies detectades, discrepàncies que sorgeixen entre la normativa autonòmica garantista, a l'hora de protegir possibles alteracions i agressions en el territori, i una normativa estatal molt liberalitzadora, que permet la instal·lació de grans superfícies, amb una simple declaració responsable.

La comissió bilateral ha estat des de la seva constitució en el mes de desembre fins al mes de juliol sense activitat, set mesos sense fer res. És tot just després del canvi de Govern quan el ministeri activa la comissió, recordant que el termini per arribar a acords acaba el 18 de juliol, set mesos sense fer res, onze dies per trobar solucions. De fet, l'única activitat d'aquesta comissió ha tengut lloc els dies 13 i 15 de juliol, ha estat el nou Govern, amb tota la prudència del món, amb la seva presidenta al capdavant, qui s'ha reunit amb tot l'Estat, amb l'Estat, per resoldre les discrepàncies, per fer la feina que no s'havia fet, amb el rellotge en contra.

A la darrera reunió es va tancar un acord, on el Govern balear es comprometia a plantejar una modificació de la llei, segons els termes acordats, per a així salvar les discrepàncies. Per altra part, el Govern de l'Estat es comprometia a no interposar el recurs d'inconstitucionalitat. Aquí jo destacaria la bona feina dels nostres representants que varen fer entendre als representants de l'Estat la importància de no permetre la desregulació, ni que les grans superfícies es puguin establir a la nostra comunitat sense la llicència preceptiva. Però, tot i l'acord tancat a la comissió bilateral del dia 15 al 17, el Consell de Ministres acordà, a petició del president Rajoy, dur al Constitucional els articles que he citat. O sigui, al mateix temps que s'avançava cercant acords, el Sr. Rajoy ja havia decidit interposar el recurs.

De la documentació del recurs interposat crida l'atenció que el temps que la comissió bilateral va estar sense fer res, inactiva, el Govern de l'Estat va sol·licitar l'informe preceptiu per a la interposició del recurs al *Consejo de Estado*, perquè així queda ben clar a les dades d'entrada i de sortida de les sol·licituds. El Govern de l'Estat preparava el recurs, no cercava cap acord; és evident que la inactivitat partidista abans de les eleccions autonòmiques, com ho és també l'activitat partidista desplegada després de les eleccions, ho veiem amb aquest recurs i amb uns altres recursos, com també és el de la Llei de mines, molt poca activitat abans, molta activitat ara. És clar que el Sr. Rajoy, de totes les possibilitats, ha triat la més perjudicial per als interessos dels ciutadans de les nostres illes, en especial per al sector de comerç. Hagués pogut respectar l'acord de la comissió bilateral i seguir avançant per aquest camí, amb diàleg, cercar solucions i no interposar el recurs, però el Sr. Rajoy va triar la pitjor opció: no sols interposar el recurs, sinó que a més, amb la invocació de l'article 161.2 de la Constitució, amb l'admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional, es varen suspendre els articles objecte de recurs, i la suspensió d'aquests articles activa automàticament els equivalents de la Llei estatal, la normativa estatal es basa en el principi d'unitat de mercat i en la liberalització absoluta, que permet la instal·lació de grans superfícies amb una simple declaració responsable, procediment que amb la fragilitat del nostre territori és inviable.

Per això ens trobam davant de la necessitat d'una resposta ràpida per part del Govern, per donar seguretat jurídica, per fugir del risc de rompre l'equilibri territorial, mediambiental i comercial que per la particularitat geogràfica té la nostra comunitat, equilibri que amb l'aplicació de la llei estatal es pot perdre. Les quatre illes presenten una realitat econòmica i social especial, diferent entre elles mateixes i també diferent entre les altres comunitats autònomes, i el Govern de l'Estat ho ha d'entendre i ho ha de respectar. Per això, pel que fa a la forma, consideram que estam davant d'un cas d'extraordinària i urgent necessitat, i per tant està ben justificat l'ús d'aquest procediment legislatiu excepcional que el Govern ha fet. Aquesta resposta ràpida i eficaç surt de la feina feta d'aquest govern, amb totes les cauteles i amb tot rigor, amb els sectors implicats, amb els partits polítics amb representació parlamentària, amb representants sindicals i també amb el Govern de l'Estat; resposta ràpida, necessària per no deixar ni un dia entre la suspensió dels articles afectats i la resposta del Govern, ja que sense aquesta resposta l'aplicació automàtica per temps indefinit de la normativa estatal hauria estat molt

perjudicial per al sector comercial d'aquestes illes; resposta ràpida també per aportar seguretat jurídica i fugir de la incertesa que s'hauria generat; resposta eficaç que respecta la legalitat, al mateix temps que defensa de forma clara els interessos dels ciutadans d'aquestes illes davant les agressions del Govern de l'Estat.

Per aquest motiu el contingut del decret llei conté els acords presos a la comissió bilateral per tal d'encaixar la nostra regulació en el marc estatal, i també els acords presos amb el sector a la Comissió Interinsular assessora de comerç.

Vull destacar només tres preceptes del decret llei. Un és l'articulació de la possibilitat d'efectuar de forma adequada un control previ de la nova implantació i de l'ampliació de grans establiments comercials amb un únic procediment d'autorització, tot integrat davant la direcció competent en matèria de comerç, això per raons d'interès general, per preservar a cada illa els valors territorials, mediambientals i culturals que es podrien veure en perill sense l'adequat control previ; per aquest procediment l'autorització autonòmica el termini és de tres mesos, i destaca el silenci positiu.

L'altre aspecte a destacar d'aquest decret llei és que fixa els criteris per tenir la consideració de zona de gran afluència turística; així ho poden sol·licitar municipis de més de 100.000 habitants i més de 600.000 pernoctacions a l'any, o que comptin amb ports on operin creuers turístics que hagin rebut més de 200.000 turistes el darrer any. Per a aquest procediment de declaració de gran afluència turística el termini és de sis mesos i el silenci també és positiu.

Per acabar s'ha de destacar també la disposició addicional primera, que disposa la suspensió cautelar de l'aprovació de les llicències durant un període de sis mesos, amb una doble finalitat: per una banda, articular un únic procediment d'autorització que substituirà tots els procediments que fins ara hi havia; no hi ha dubte que és una millora important que agilitarà els tràmits. Per altra part es faculden el Govern i els consells perquè en l'àmbit de les seves respectives competències planifiquin i ordenin els equipaments comercials, sempre tenint en compte que tota regulació o intervenció ha de respondre a fundades raons d'interès general en relació amb la protecció del medi ambient, de l'entorn urbà, del patrimoni històric i cultural.

Per tot això el Grup Socialista votarà afirmativament la validació d'aquest decret llei, perquè consideram que les mesures que conté són necessàries per salvaguardar els interessos dels treballadors i dels empresaris del sector de comerç, així com també dels ciutadans d'aquestes illes.

Moltes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. A continuació continuarem les intervencions de rèplica.

Té la paraula el Sr. Marí Bosó.

EL SR. MARÍ I BOSÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per afegir-nos a la sol·licitud que es tramiti com a projecte de llei, perquè crec que d'aquesta manera podrem parlar-ne i segurament matisar la redacció, si no volen canviar la disposició addicional per donar pas als consells insulars perquè puguin fer norma territorial cautelar prèvia a la redacció del pla director. Ja sé que no són incompatibles, però sí que poden ser alternatives, i per tant podem sortir-ne, del pas, d'un pas que ja hem qualificat com a grup parlamentari que era un greu error per part de l'Estat recórrer per inconstitucionalitat aquesta llei, però podem sortir del pas d'una manera que jurídicament és menys atacable.

Per tant demanam que es tramiti com a projecte de llei per tenir la possibilitat d'esmenar-ho; per tenir també la possibilitat almenys d'afegir o de fer un afegit i mantenir la suspensió de tal manera que si es retira el recurs d'inconstitucionalitat la suspensió decaigui, perquè la llei serà plenament.

I una altra qüestió, també: la intenció de recórrer o de no recórrer és de l'Estat, i ja s'arreglarà l'Estat; si l'Estat exhaureix els nou mesos que té per recórrer és el seu problema, el que no anava a fer el govern del Partit Popular era donar-li presses. Escolti, ja s'arreglarà. Té sis mesos. Si se'n va recordar dos dies abans d'acabar el termini, idò miri, vàrem tenir mala sort, però el que no anava a fer..., a veure, escolti, això si volen entendre com és ho entenen, si no, no ho entengui, però el que mai no he fet jo en la meua vida és recordar a l'adversari quan li venç el termini i que em foti recurs. Això no ho he fet mai a la meua vida, com a advocat.

Moltes gràcies, presidenta.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré breu, no s'espantin, però en qualsevol cas sí que no podia desaproveitar aquesta oportunitat per recordar al Partit Popular que hauria d'assumir una certa responsabilitat, i recordar-li durant aquests quatre anys com va gestionar les comissions bilaterals, perquè avui, la situació en què estam avui mateix té molt a veure amb la nefasta gestió que va fer el Partit Popular de les comissions bilaterals, i jo els ho vull recordar, els ho vull recordar.

Lleis, 51 lleis tramitades durant la passada legislatura, de les quals 12 eren validacions. Decrets llei, la forma de governar del Partit Popular, 29. Comissions bilaterals, 14; i jo diferenciaria dos tipus de comissions bilaterals: aquelles que tenen a veure amb l'àmbit competencial, on trobaríem la Llei de comerç i la Llei d'etiquetatge dels productes, recordaran, de la Llei de protecció al consumidor; i després les lleis..., no sé com dir-ho, jo diria "nyaperes"; exemple: la Llei 6/2013, de 7 de novembre, de pesca marítima, marisqueig, etc.; comissió bilateral per tractar qüestions de possible inconstitucionalitat, d'advertiments, articles: el tercer a), l'article 4, l'article 7,

l'article 8.2, l'article 10.2, l'article 11 apartat h), l'article 12, l'article 13, l'article 14.2, l'article 14.3, l'article 15.1, l'article 16.1, l'article 16.2, etc. Aquesta és la comissió bilateral.

Però vostès diran “bé, no, arribam a acords i les complim”. No, arribam a acords i, senyors meus, no els complim, però a més a més, per escrit. Per exemple de la llei bilateral que afecta la Llei de turisme, resposta pel que fa a la derogació que li encomanava l'acord bilateral, la derogació del segon paràgraf del punt 1 de l'article 59 de la Llei 8/2012, “es procurarà promoure la derogació amb la propera llei”, s'ha fet?, no.

De la llei de mobilitat interadministrativa, també, acords de la comissió bilateral, s'han complert?, s'han duit a terme?, no, s'incorporarà al projecte de llei de funció pública, on és el projecte de llei de funció pública?, vostès l'han vist, de la passada legislatura? No, i així seguim, però és que no només açò, encara n'hi ha més.

Resulta que la llei de coordinació de policies locals, la comissió bilateral estableix uns acords dels quals declara que alguns dels articles han de ser derogats, bé idò el Govern no modifica la llei, però és no només açò, aprova un decret, un reglament que desenvolupa la llei d'un article que està inclòs... i tant!, que està inclòs dins els acords de la comissió bilateral, i tant que és ver!, i tant que és ver!, i tant que és ver, aquesta és la pràctica que ha fet el Partit Popular, el Govern Bauzá de les comissions bilaterals, i ara troben estrany que ens trobem aquí?, no, ens trobem aquí una altra vegada per aquesta pràctica de deixadesa del grup popular que porta a un caos legislatiu que no s'aguanta i el Partit Popular hauria d'assumir responsabilitats, assumir la responsabilitat que no ha fet la feina i que avui, avui, li toca respondre i donar la cara i dir clarament que no va complir la seva feina i que... bé, votar en conseqüència i actuar en conseqüència i avui precisament d'açò no n'han pregonat, d'açò no n'hem sentit res, hem sentit excuses tirant pilotes fora cap a aquell que... com si fos un tema nou.

Quantes vegades aquí vàrem recordar que hi havia lleis que estaven en aquesta situació?, i des d'aquesta bancada els diputats... “catorze lleis de possible inconstitucionalitat?”, tothom s'espantava, “què és açò?, de què parla aquest?”, doncs aquestes són les lleis, ara ho han comprovat, ara coneixen aquestes catorze lleis que tenen, que han estat objecte de comissions bilaterals de les quals moltes no s'han resolt, ara les coneixen i ara les patim nosaltres i ara les resollem nosaltres.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Té la paraula la Sra. Bel Oliver.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

Gràcies, presidenta. Deia jo al principi, en la meua intervenció, que aquesta era una resposta..., aquest decret llei és una resposta al recurs d'inconstitucionalitat, per això va a salvar les qüestions possibles d'inconstitucionalitat i aclarir tota

una qüestió que podria ser molt perjudicial per als interessos del sector comercial i dels ciutadans d'aquestes illes i salvar aquesta situació. És una qüestió d'emergència, va a qüestions molt concretes i nosaltres entenem que no és procedent en aquest cas obrir..., tramitar en tot cas aquest decret llei com a llei.

També és cert que nosaltres, el Grup Socialista està en total disposició a fer un replantejament, a modificar, a pensar, a millorar per suposadíssim aquesta llei de comerç i proposam que en un futur immediat puguem establir les comissions i grups de feina per començar a fer aquesta feina que pensam necessari, però no en aquest cas d'aquest decret llei.

Respecte del que deia el Sr. Mari, el que pensam és que ara és el moment també que els consells insulars amb aquesta norma, amb la disposició addicional primera que s'ha oberta, comencin realment a fer aquella feina que tampoc no varen fer en tota la passada legislatura, que l'únic que varen fer va ser..., el Govern de les Illes Balears firmar un protocol sense cap tipus de contingut econòmic, un paper que diu “hem de fer moltes coses”, però que al final no varen fer res.

Crec que és bon hora que cadascun dels consells que correspongui, amb les seves competències, facin els plans directores sectorials de comerç perquè és la seva responsabilitat i perquè és una necessitat ben urgent i ben necessària que es dugui a terme.

En aquest sentit, el nostre suport al Govern, reiteram el suport al Govern en aquest decret llei, pensam que era necessari. És evident que la comissió bilateral va estar set mesos sense fer res i que en dos dies, no en deu dies, en dos dies s'ha hagut de fer tota aquella feina que no s'havia fet. No sé què s'havia fet mentrestant, bé, sí, s'havien demanat els informes preceptius al Consell d'Estat per interposar el recurs. No cercaven solucions, s'estaven armant, estaven procurant dur a terme el recurs d'inconstitucionalitat. Això és el que diuen els documents de tot el dossier que hi ha allà, Sr. Mari. És una pena, però és així, s'armaven el recurs, no estaven cercant solucions.

Res, jo crec que el Govern aquí, amb la presidenta al davant, amb aquests pocs dies ha estat capaç de sortir d'aquesta situació tan incòmoda per als nostres comerciants, per al sector del comerç, crec que ho han fet molt aviat amb diàleg, cercant consens amb el Govern de l'Estat, amb els sectors implicats i ho han aconseguit, i a partir d'ara començar a avançar i a fer feina en aquesta direcció.

Moltes gràcies. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam al torn de contrarèpliques...

Procedirem a la votació de validació del decret llei.

Comença la votació.

Total de vots emesos, 53; a favor, 34; en contra, 1; abstencions, 18.

Queda validat el Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de mesures urgents en matèria de grans establiments comercials.

Com s'ha exposat, hi ha grups que demanen que es tramiti com a projecte de llei, per tant, passarem a la votació per procedir a aquesta... a tramitar-lo com a projecte de llei.

Comença la votació.

Total de vots emesos, 52; a favor, 24; en contra, 28; abstencions, 0.

Per tant, no procedeix la tramitació com a projecte de llei.

I no havent-hi altres assumptes a tractar, s'aixeca la sessió.

Bones vacances a tots els que se'n van de vacances i, per favor, recarreguin el pol positiu de les piles, eh?

Gràcies.



DIARI DE SESSIONS
DEL
PARLAMENT
DE LES
ILLES BALEARS